

PERSPECTIVA SOCIOLÓGICA



Vida Religiosa
CENTINELA de
Esperanza



EL DESAFÍO DE LA IGUALDAD ALGUNAS CLAVES PARA ABORDAR LA COYUNTURA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Sol Prieto¹

Resumen

América Latina y el Caribe (ALC) se destacan como la región más desigual del mundo, con brechas que han aumentado en los últimos años. Esta presentación examina cómo la desigualdad estructural en la región perpetúa ciclos de polarización, violencia colectiva y erosión democrática. Estas dinámicas están estrechamente vinculadas a factores heredados y a la exclusión de género y etnicidad, afectando desproporcionadamente a las mujeres y a las comunidades indígenas y afrodescendientes. La desigualdad alimenta divisorias sociales que actores políticos utilizan para movilizar tensiones y consolidar poder, exacerbando la violencia y debilitando el tejido democrático. Finalmente, se presentan algunos desafíos relevantes en este contexto, como son la redistribución del ingreso y la riqueza mediante impuestos progresivos, programas activos contra la pobreza y la promoción de espacios de diálogo para mitigar la polarización. Además, se enfatiza la necesidad de fortalecer las instituciones democráticas como pilares de la estabilidad regional. Este análisis resalta la urgencia de respuestas integradas y colectivas que consideren las complejidades de ALC y promuevan sociedades más equitativas y democráticas.

Palabras clave: desigualdad, polarización, violencia, democracia, género.

Introducción

América Latina y el Caribe (LAC) han sido, históricamente, una región marcada por profundas desigualdades sociales, económicas y políticas. A pesar de los avances en algunos indicadores de desarrollo humano, la persistencia —e incluso el aumento— de estas brechas sigue siendo un problema estructural y constitutivo de las realidades latinoamericanas y

¹ Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Licenciada en Sociología en la misma universidad y Magíster en Ciencia Política en la Universidad Torcuato Di Tella. Es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET de Argentina, y profesora en la UBA y en la Universidad de San Andrés.

caribeñas. La desigualdad no solo afecta la calidad de vida y la movilidad social de millones de personas, sino que también moldea la manera en que se organizan las relaciones sociales y políticas, generando dinámicas que perpetúan un ciclo difícil de romper.

El argumento central de esta presentación es que la desigualdad en este subcontinente no es un fenómeno aislado: es un factor que desencadena y perpetúa otros procesos críticos, como la polarización social y política, la violencia colectiva y la erosión democrática. Estas dinámicas no solo agravan la situación de los grupos más vulnerables, sino que también amenazan la estabilidad de las democracias en la región. En otras palabras, la desigualdad económica y social no solo se traduce en pobreza o falta de oportunidades individuales; tiene efectos estructurales sobre la cohesión social y la capacidad de las instituciones democráticas para canalizar las demandas de manera pacífica.

La polarización emerge, en este contexto, como un subproducto de las profundas brechas de ingresos, acceso a recursos y reconocimiento social. Este fenómeno no solo divide a las sociedades, sino que también debilita los espacios de debate y deliberación democrática. La frustración, producto de esta desigualdad, así como de los problemas de movilidad social, no se traduce en cambios estructurales a través de la política institucional; por el contrario, se manifiesta a menudo en estallidos de violencia colectiva e inestabilidad, como los observados en varios países de la región durante los últimos años.

Este ciclo de desigualdad, polarización y violencia conduce, a su vez, a una erosión democrática cada vez más palpable. Cuando la democracia no logra ofrecer soluciones tangibles a los problemas más acuciantes de la población, pierde legitimidad. Esto abre la puerta a alternativas autoritarias y reduce la confianza en las instituciones, lo que perpetúa un círculo vicioso en el que la desigualdad no solo persiste, sino que se agrava.

En esta presentación se analizan los principales desafíos que enfrenta la región en términos de desigualdad, polarización, violencia colectiva y erosión democrática. Se abordarán también las particularidades de la desigualdad de género y étnica, así como las posibles soluciones para construir sociedades más equitativas y democráticas.

1. Desigualdad persistente y heredada

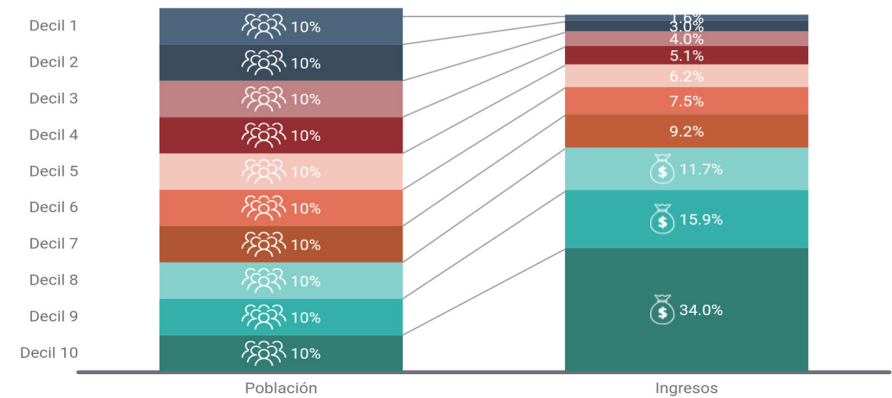
América Latina y el Caribe constituyen, desde hace décadas, la región más desigual del mundo. Esta característica estructural no solo persiste, sino que se ha acentuado en los últimos años, evidenciando una profunda

disparidad tanto en la distribución de ingresos como en la concentración de la riqueza. Los datos más recientes arrojan que el 10% más rico de la población gana 12 veces más que el 10% más pobre y controla el 34% de la riqueza regional, la proporción más alta entre todas las regiones del planeta. En países como Colombia, Chile y Uruguay, el 1% más rico de la población concentra cerca del 40% de la riqueza total, un indicador que refleja la magnitud de la inequidad en la región.

Distribución del ingreso de las personas por deciles de ingreso per cápita

(Porcentaje del ingreso nacional total)

América Latina (promedio simple) 2023



Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), CEPALSTAT, sobre la base de Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG).

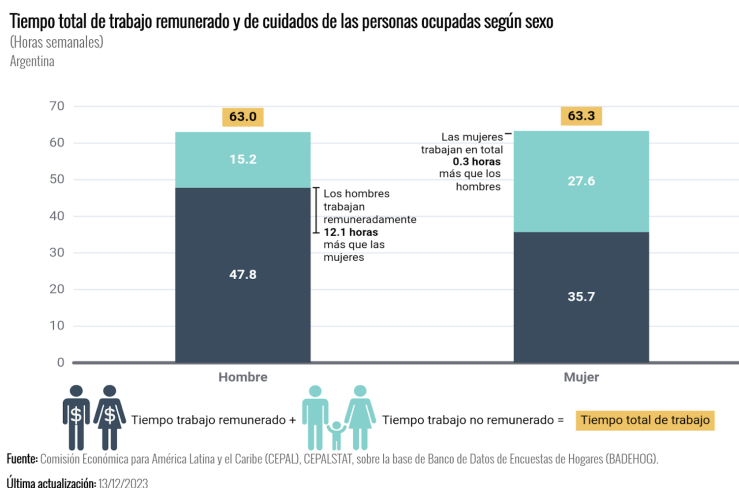
Última actualización: 20/11/2024

Este nivel de concentración de la riqueza y los ingresos no es meramente coyuntural; responde a factores estructurales profundamente arraigados, que perpetúan un ciclo de desigualdad difícil de romper. En las últimas dos décadas, en países como Brasil, Chile, México y Uruguay, la relación entre riqueza neta e ingreso neto ha aumentado, lo que indica que, a medida que las élites económicas acumulan más capital, las clases trabajadoras experimentan un estancamiento o retroceso en sus niveles de ingreso real. Esta tendencia profundiza la brecha entre los sectores más ricos y pobres de la sociedad, generando un contexto de baja movilidad social y oportunidades desiguales (BID; 2024).

Un aspecto fundamental para entender la persistencia de la desigualdad en América Latina es su carácter heredado. Se estima que el 53% de las desigualdades en la región se explica por factores heredados, como la familia de origen, el lugar de nacimiento y el acceso diferencial a recursos educativos y económicos (BID, 2024a). Esta realidad significa que la desigualdad no solo es un fenómeno presente, sino también

transgeneracional: se transmite de una generación a otra, creando sociedades con bajos niveles de macromovilidad social. En términos sociológicos, esto implica que las oportunidades de ascenso social están fuertemente condicionadas por el origen socioeconómico de las personas, lo que perpetúa la estructura de clases y limita la posibilidad de movilidad social ascendente. Como señala François Dubet (2023), en sociedades donde la desigualdad heredada es tan predominante, la meritocracia pierde sentido, y las barreras estructurales se convierten en el principal obstáculo para la igualdad de oportunidades.

La desigualdad estructural en América Latina también tiene un marcado componente de género. Las mujeres enfrentan múltiples formas de exclusión y discriminación que limitan su acceso a recursos económicos, educativos y sociales. Las mujeres realizan más del 70% del trabajo no remunerado en la región, considerando tanto la participación como la intensidad horaria. Esta carga desproporcionada de trabajo doméstico y de cuidados limita su capacidad para acceder al mercado laboral en igualdad de condiciones con los hombres. Como resultado, existe una brecha de ocupación de 22 puntos porcentuales entre hombres y mujeres, lo que significa que una proporción significativa de mujeres permanece fuera del mercado de trabajo (CEPAL, 2024).



Esta exclusión laboral tiene consecuencias directas sobre la autonomía económica de las mujeres. Mientras que solo el 10% de los hombres no tiene ingresos propios, esta cifra asciende al 26% en el caso de las mujeres. La situación es aún más crítica en los sectores de menores

ingresos: en el primer quintil, el 40% de las mujeres no tiene ingresos propios. Esta disparidad económica se traduce en una brecha salarial del 20%, que se amplía al 25% entre las personas mayores de 55 años. La carga desproporcionada del trabajo no remunerado y la exclusión del mercado laboral refuerzan un ciclo de pobreza y dependencia económica que afecta de manera desproporcionada a las mujeres, limitando sus oportunidades de desarrollo personal y profesional.

La desigualdad de género en América Latina no puede analizarse de manera aislada; está íntimamente vinculada a otras formas de opresión, como las desigualdades de clase y raza. La región está marcada por un legado colonial que ha dejado profundas huellas en la estructura social y económica. Como señala Segato (2007) las clases sociales en América Latina tienen colores: las poblaciones indígenas y afrodescendientes ocupan, de manera desproporcionada, los estratos más bajos de ingresos y riqueza. Según los datos disponibles, el 60% de los indígenas forma parte del 40% más pobre de la población (CEPAL, 2024). Esta situación refleja no solo una desigualdad económica, sino también una exclusión estructural basada en criterios asociados a la línea de color.

En el caso de la población afro, la situación es aún más preocupante debido a la falta de datos que permitan medir con precisión la magnitud de la opresión económica que enfrentan. Esta invisibilización estadística es, en sí misma, una manifestación de la exclusión estructural. La combinación de género, clase y etnicidad crea un escenario de múltiples desigualdades que se refuerzan mutuamente, generando barreras adicionales para las mujeres indígenas y afrodescendientes.

Las consecuencias de la desigualdad estructural en América Latina son profundas y multifacéticas. En el ámbito social, la desigualdad perpetúa ciclos de pobreza que afectan de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población. La falta de acceso a recursos básicos, como la educación de calidad y los servicios de salud, limita las oportunidades de desarrollo personal y profesional, lo que contribuye a la reproducción intergeneracional de la pobreza.

En términos económicos, la desigualdad tiene un impacto negativo sobre el crecimiento y la estabilidad macroeconómica. Diversos estudios han constatado que las sociedades más desiguales tienden a experimentar niveles más bajos de crecimiento económico y mayores niveles de inestabilidad. La concentración de la riqueza en manos de un pequeño grupo de personas (en general muy parecidas entre sí) limita el consumo y la inversión en los sectores más pobres, lo que reduce la demanda interna y frena el crecimiento económico. Además, la desigualdad

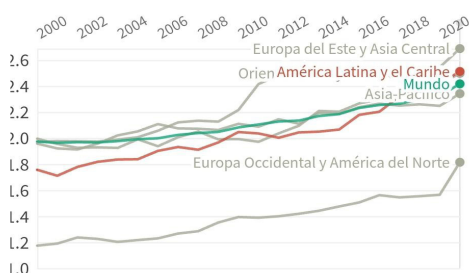
contribuye a generar un clima de descontento social y polarización que puede desembocar en crisis políticas y estallidos de violencia colectiva, como se ha observado en varios países de la región en los últimos años. Desde una perspectiva política, la desigualdad estructural erosiona la cohesión social y debilita la legitimidad de las instituciones democráticas. Cuando las personas perciben que el sistema no ofrece oportunidades reales de mejora, aumenta la desconfianza en las instituciones y el apoyo a alternativas autoritarias. Este fenómeno genera un círculo en el que la desigualdad alimenta la polarización y la inestabilidad, lo que, a su vez, dificulta la implementación de políticas redistributivas y perpetúa la desigualdad.

2. Polarización y desencuentro

Ante la frustración que produce la desigualdad y la falta de movilidad social, surge un descontento que, en contextos críticos, puede encontrar dificultades a la hora de traducirse a la arena electoral. En este contexto, los “emprendedores políticos” (Tilly, 2003) desempeñan un papel central. Estos actores aprovechan el malestar latente, articulan demandas sociales insatisfechas y exacerban las divisiones existentes para consolidar su posición. La acción de estos emprendedores no ocurre en un vacío; está enmarcada por dinámicas sociales y económicas que facilitan la polarización y, en algunos casos, conducen a episodios de violencia colectiva.

Esto puede constatare para ALC, que actualmente es la región del mundo donde más se incrementó la polarización a lo largo de los últimos 20 años, situándose por debajo de Europa del Este y Asia Central, pero con un incremento sostenido a lo largo del tiempo.

La región de ALC ha experimentado el mayor aumento de la polarización política en los últimos 20 años



**GRAPH
THOUGHT**

Fuente: Varieties of Democracy (V-Dem) Project. Nota: El indicador emplea una escala de cinco puntos, donde 0 representa que los partidarios de los campos políticos opuestos generalmente interactúan de manera amistosa, y 4 significa polarización extrema donde los campos políticos opuestos generalmente interactúan de manera hostil.

La desigualdad estructural proporciona las bases materiales para este proceso. Como señala Charles Tilly (2003), la explotación —definida como el control de recursos valiosos por parte de una élite que se beneficia del trabajo de otros— es uno de los mecanismos fundamentales que sustentan la desigualdad. Las élites económicas y políticas acaparan recursos, no solo materiales, sino también simbólicos y sociales. Este acaparamiento genera privilegios exclusivos que son defendidos por quienes detentan el poder, y produce un ambiente donde las líneas divisorias entre grupos se intensifican. La exclusión estructural, exacerbada por el acaparamiento de oportunidades, refuerza la percepción de que ciertos grupos tienen acceso privilegiado a recursos y poder, mientras que otros quedan marginados. Este contexto favorece la activación de divisorias sociales, un proceso en el que las diferencias existentes se convierten en el eje central de las interacciones y relaciones sociales.

La activación de divisorias no es simplemente un fenómeno pasivo; es un proceso político activo. Las divisorias —categorías sociales que establecen un “nosotros” frente a un “ellos”— se refuerzan y se convierten en elementos clave de la vida social. Esto no ocurre de manera espontánea: requiere la intervención de emprendedores políticos que articulan discursos y narrativas que polarizan a la sociedad. Estos actores identifican y magnifican las diferencias entre grupos, y las presentan como insalvables o fundamentales para la identidad colectiva. De este modo, transforman el descontento en un recurso político, creando coaliciones basadas en la oposición a un enemigo común. La polarización se intensifica cuando estas divisorias se vuelven centrales en la organización social, desplazando otras formas de identificación o cohesión.

La correduría juega un papel crucial en este proceso. Consiste en conectar diferentes enclaves sociales que previamente estaban desconectados o en conflicto. Los emprendedores políticos actúan como corredores, estableciendo vínculos entre grupos descontentos y ofreciéndoles un marco común de acción. Esta conexión no siempre garantiza coordinación o cohesión interna; sin embargo, crea las condiciones para que diferentes sectores se alineen en torno a una causa común, generalmente definida en términos de oposición a otro grupo. La correduría, al conectar estos enclaves, facilita la formación de coaliciones heterogéneas que comparten un sentimiento de exclusión o agravio. A medida que estas coaliciones se consolidan, la polarización se profundiza, ampliando la distancia entre los diferentes actores sociales.

La polarización, entendida como el proceso de ampliación del espacio entre grupos opuestos, es un fenómeno dinámico que combina la correduría y la activación de divisorias. No solo refuerza la percepción de que las

diferencias entre grupos son insalvables, sino que también desplaza a los actores moderados o no comprometidos, empujándolos hacia uno u otro extremo. En este contexto, los emprendedores políticos utilizan las divisorias existentes para movilizar a los sectores descontentos, presentando a los otros grupos como amenazas o enemigos. Esta estrategia no solo fortalece la identidad del grupo movilizado, sino que también propicia la violencia colectiva al otorgar mayor trascendencia a la línea divisoria. Cuando las divisorias se convierten en el eje central de la organización social, las interacciones entre grupos se vuelven más conflictivas y menos susceptibles de resolución pacífica.

3. Violencia colectiva frecuente y naturalizada

En efecto, la violencia colectiva entendida, tal como la define Tilly (2003) como el daño inmediato de personas y/o cosas que incluye al menos dos agentes de daño con algún nivel de coordinación, es un fenómeno cada vez más común. Solo en los últimos 5 años se detectaron 11 hechos de violencia colectiva, muchos de ellos con alcance nacional, con saldos amplios de heridos, detenidos y hasta víctimas fatales.

Hechos relevantes de violencia colectiva en ALC 2019-2024

País	Año	Evento
Chile	2019	Protestas masivas inicialmente por el precio del transporte que escalaron durante meses en violencia y articulación de sectores. Se destacaron los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, en especial en Santiago.
Bolivia	2019	La crisis política en Bolivia estalló tras las elecciones de octubre de 2019, cuando Evo Morales fue reelegido en un proceso electoral cuestionado por presunto fraude. Las protestas surgieron tanto de los sectores que denunciaban la legitimidad de los comicios como de los seguidores de Morales. Este conflicto polarizó al país en líneas étnicas, políticas y sociales.

Ecuador	2019	El levantamiento en Ecuador fue motivado por la eliminación de subsidios a los combustibles, parte de un acuerdo del gobierno con el FMI. Las protestas, lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), unieron a campesinos, estudiantes y sindicatos.
El Salvador	2019	En 2019, El Salvador vivió un contexto de alta violencia protagonizada por enfrentamientos entre pandillas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18. Estos conflictos se intensificaron justo antes y después de la elección de Nayib Bukele como presidente en junio. Desde entonces, la práctica gubernamental de encarcelamiento masivo con violaciones a los Derechos Humanos se volvió frecuente, alcanzando un pico histórico de personas encarceladas.
Venezuela	2019	Las protestas de 2019 en Venezuela estuvieron marcadas por la profunda crisis política y económica del país, especialmente tras la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente interino en enero. La represión estatal fue intensa y en una de las jornadas más violentas, el 30 de abril, las fuerzas de seguridad dispersaron a manifestantes en Caracas con gases lacrimógenos y camiones blindados.
Colombia	2019	Las manifestaciones en Colombia comenzaron en noviembre como parte del “Paro Nacional”, en rechazo a las reformas laborales y pensionales propuestas por el gobierno de Iván Duque. Estas protestas unieron a sindicatos, estudiantes, indígenas y otros sectores sociales.
Brasil	2021	El 6 de mayo de 2021, la favela de Jacarezinho, en Río de Janeiro, fue escenario de una de las operaciones policiales más letales en la historia de Brasil. El operativo, dirigido contra supuestos miembros de una organización de narcotráfico, dejó un saldo de varios muertos, entre ellos un agente policial y varios residentes de la comunidad.

México	2021	En 2021, México fue escenario de distintos episodios de violencia colectiva, principalmente en el marco de protestas sociales. El 8 de marzo, en el Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres se manifestaron en la Ciudad de México, exigiendo justicia por los feminicidios y la violencia de género. La jornada terminó con enfrentamientos violentos con la policía. Además, en Chiapas, en mayo, estudiantes de la escuela rural Mactumactzá fueron detenidos arbitrariamente durante una protesta por mejoras en la educación, lo que desencadenó bloqueos de carreteras y nuevas manifestaciones hasta que fueron liberados.
Cuba	2021	El 11 de julio de 2021, Cuba vivió una de las mayores protestas antigubernamentales en décadas, impulsada por la crisis económica. Las manifestaciones se extendieron a varias ciudades, incluyendo La Habana y Santiago. El gobierno respondió con una fuerte represión.
Perú	2022	Las protestas en Perú en 2022 surgieron en un contexto de crisis política y descontento social contra el presidente Pedro Castillo. Las manifestaciones, especialmente fuertes en regiones andinas, resultaron en varios muertos y heridos en enfrentamientos con la policía.
Brasil	2023	En enero de 2023, partidarios de Jair Bolsonaro asaltaron edificios del gobierno en Brasilia, protestando contra la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva. La invasión del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio Presidencial resultó en 1.500 detenidos y decenas de heridos.

Fuente: elaboración propia con base en registros de medios de comunicación.

El *racconto* no es exhaustivo y no abarca otras formas no colectivas de violencia. Simplemente se trata de un ejercicio que, incluso con sus límites, pone sobre la mesa que la violencia colectiva constituye una realidad común en la región. La violencia colectiva, en este sentido, no es un fenómeno raro, irracional o totalmente espontáneo; es el resultado de procesos sociales y políticos específicos. Tilly (2003) sostiene que la violencia colectiva surge cuando los emprendedores políticos logran activar

divisorias sociales y movilizar recursos en torno a ellas. Este proceso se ve facilitado por la existencia de desigualdades estructurales que generan agravios y resentimientos. La explotación económica y el acaparamiento de oportunidades crean un contexto en el que ciertos grupos se sienten marginados o excluidos. Esta percepción de exclusión es el caldo de cultivo para la polarización y la violencia colectiva. Los emprendedores políticos, al articular estos agravios en discursos polarizantes, convierten el descontento en un recurso movilizador.

Los especialistas de la violencia complementan la acción de los emprendedores políticos. Estos actores —que pueden ser tanto grupos armados organizados como individuos con acceso a medios de coerción— desempeñan un papel crucial en la transformación del descontento en violencia colectiva. No siempre es necesario que recurran a la violencia explícita; a menudo, la amenaza o la demostración de fuerza es suficiente para consolidar el poder de los emprendedores políticos. Los especialistas de la violencia, al igual que los emprendedores, utilizan las divisorias sociales para justificar su acción, presentando la violencia como una respuesta legítima frente a la amenaza representada por el “otro” grupo.

Cuando se traen al análisis estos eventos, lo que surge como conclusión es que la desigualdad no solo es un factor económico; es un mecanismo que produce y reproduce divisorias sociales. La explotación económica genera una distribución desigual de los recursos, lo que a su vez facilita el acaparamiento por parte de ciertos grupos. Este acaparamiento refuerza las divisorias existentes, creando un ciclo en el que la desigualdad se perpetúa y se profundiza. La activación de divisorias no solo intensifica la polarización, sino que también legitima la violencia como medio para resolver conflictos. Cuando las divisorias se vuelven el eje central de la organización social, las posibilidades de diálogo y consenso se reducen, y la violencia colectiva se convierte en una herramienta política.

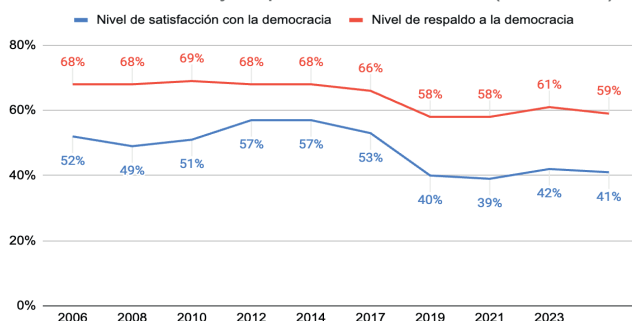
La polarización en América Latina no puede entenderse sin considerar el papel de los emprendedores políticos y los especialistas de la violencia en la activación de divisorias sociales. La desigualdad estructural proporciona el contexto material para este proceso, generando agravios que son aprovechados por actores que buscan consolidar su poder. La explotación económica y el acaparamiento de oportunidades crean un ambiente en el que las divisorias se intensifican, desplazando a los actores moderados y polarizando a la sociedad. Este ciclo de desigualdad, polarización y violencia no solo erosiona la cohesión social, sino que también debilita las instituciones democráticas, dificultando la posibilidad de construir sociedades más justas y equitativas.

Estas manifestaciones frecuentes de violencia colectiva por sí solas dan cuenta de cierta incapacidad de las democracias latinoamericanas para resolver demandas, conflictos y desacuerdos. Pero existen, además, otros indicadores que también dan cuenta de esto. Tanto el nivel de satisfacción y respaldo a la democracia (LAPOP, 2024) como el nivel de confianza en las instituciones muestran un declive marcado y sostenido a lo largo de los últimos años.

Esto podría estar indicando que la erosión democrática no solo “estalla” en episodios de violencia callejera que implican la movilización de personas y recursos, sino que también forma parte de las representaciones y creencias que aparecen en la vida cotidiana de las personas.

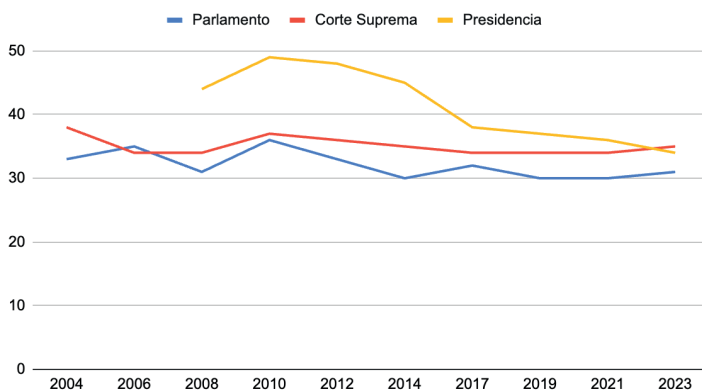
Nivel de satisfacción y respaldo a la democracia y confianza en las instituciones

Nivel de satisfacción y respaldo a la democracia (2004-2023)



Fuente: Democracy Pulse (LAPOP).

Confianza en instituciones (en %)



Fuente: Democracy Pulse (LAPOP).

4. Desafíos urgentes

El análisis y la reflexión en torno a estos indicadores parecen indicar que los desafíos y dolores que enfrenta América Latina en la actualidad son diversos y complejos, reflejo de estructuras profundamente arraigadas que requieren un enfoque de cambio social. A continuación, se presentan algunos de los retos más significativos, aunque no de forma exhaustiva ni definitiva, sino como puntos de partida para una discusión más amplia que puede ser debatida, modificada y adaptada a los contextos específicos de cada país.

Un primer punto tiene que ver con la agenda de *reducción de la desigualdad*, que requiere de un abordaje integral. Pero el punto de partida de este abordaje debe considerar una herramienta central para la política fiscal de los países como es la implementación de más *impuestos progresivos*. La desigualdad económica sigue siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo en América Latina, una región que, a pesar de algunos avances, sigue siendo la más desigual del mundo. La brecha entre los más ricos y los más pobres sigue siendo alarmante, y su persistencia socava la cohesión social y la estabilidad política. En este sentido, la implementación de impuestos progresivos es una herramienta crucial. Los impuestos progresivos, en contextos de incremento persistente de la desigualdad, pueden ser una medida efectiva para redistribuir la riqueza y financiar políticas sociales. Sin embargo, la capacidad de los gobiernos para implementar estos sistemas se ve obstaculizada por la evasión fiscal y la resistencia de las élites económicas. Aunque algunos países han logrado avances en este frente, como el aumento de impuestos a grandes corporaciones en países como Argentina y México, los sistemas fiscales en muchos países latinoamericanos siguen siendo regresivos, favoreciendo a los sectores más concentrados.

La reducción de la desigualdad también requiere, desde este abordaje integral, de un esfuerzo activo con miras a la reducción de la pobreza. La pobreza extrema afecta a una proporción significativa de la población en América Latina, y a menudo está vinculada a factores como la falta de acceso a la educación, la salud y el trabajo digno. Las políticas activas contra la pobreza deben ser un componente esencial de cualquier agenda de justicia social en la región. Esto incluye programas que no solo brinden asistencia económica inmediata, sino que también apunten a la inclusión social, el acceso a la educación y la formación laboral. En países como Brasil y México, se han implementado programas como Bolsa Familia y Prospera, respectivamente, que han tenido efectos positivos en la reducción de la pobreza.

Una segunda cuestión tiene que ver con la *reducción de la polarización*. Como se discutió en esta presentación, la polarización política y social está alcanzando niveles muy elevados en ALC, y es uno de los factores que facilitan la erosión democrática en varios países de la región. En contextos de creciente polarización, el debate público saludable es fundamental: sin discusión política no se pueden construir alternativas de desarrollo sostenible. Sin embargo, la retórica polarizante y los ataques personales reemplazan la discusión abierta entre alternativas de acción y proyectos de país, dificultando la construcción de consensos y exacerbando las divisiones.

La reducción de la polarización no es una tarea fácil. Requiere espacios de diálogo y un compromiso político con la pluralidad de ideas. El fortalecimiento de los medios de comunicación independientes y la protección del derecho a la libertad de expresión son fundamentales para fomentar un debate sano y constructivo.

El tercer desafío, vinculado a la reducción de la polarización, es entonces *fortalecer la democracia como ámbito de desacuerdo*. Una democracia sólida se caracteriza por la capacidad de desacuerdo pacífico y la protección de los derechos fundamentales de las personas. Sin embargo, en muchas partes de América Latina, las democracias se ven amenazadas por la concentración de poder en manos de un pequeño número de actores políticos, así como por la represión de la oposición y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

Fortalecer la democracia implica no solo defender la separación de poderes, sino también garantizar que los mecanismos de control y rendición de cuentas funcionen adecuadamente. El respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión deben ser pilares de cualquier sistema democrático, como lo subrayan los casos de retroceso democrático donde la concentración de poder y el uso del aparato estatal para suprimir a la oposición han sido estrategias recurrentes.

Es importante señalar que los desafíos mencionados son parciales y pueden ser discutidos, matizados y adaptados a las realidades específicas de cada país. Las propuestas para abordar la desigualdad, reducir la polarización y fortalecer las instituciones democráticas requieren un enfoque integral y un compromiso político firme con los principios democráticos. Además, deben ser parte de un proceso continuo de participación ciudadana y transformación social que involucre a todos los actores de la sociedad, desde los gobiernos hasta la sociedad civil organizada. La crisis de la región demanda respuestas humanizantes que no se pueden construir sino de manera colectiva.

Bibliografía

Banco Interamericano de Desarrollo. "Desafiando desigualdades: una mirada a nuestro marco sectorial de desarrollo infantil". *BID*, <https://publications.iadb.org/es/desafiando-desigualdades-una-mirada-nuestro-marco-sectorial-de-desarrollo-infantil> (consultado el 9 de diciembre de 2024).

Busso, Matías y Julián Messina. "*La crisis de la desigualdad: América Latina y el Caribe en la encrucijada*" (septiembre de 2022). *BID*, <https://publications.iadb.org/es/la-crisis-de-la-desigualdad-america-latina-y-el-caribe-en-la-encrucijada> (consultado el 9 de diciembre de 2024).

CEPAL. "Panorama de la Autonomía de las Mujeres en América Latina y el Caribe", 2022. *CEPAL*, <https://repositorio.cepal.org/server/api/core/bitstreams/b096d3a0-2fd1-4724-b320-b82dbd1d006c/content> (consultado el 9 de diciembre de 2024).

Democracy Pulse (LAPOP). *Latin America Public Opinion Project*, 2024.

Dubet, François. *La desigualdad y el mérito*. Madrid: Alianza Editorial, 2023.

López, Arnoldo, y Marta Ruiz-Arranz. "Desigualdad y descontento social: Cómo abordarlos desde la política pública: Informe económico sobre Centroamérica, Haití, México, Panamá y República Dominicana" (Diciembre de 2020). *Banco Interamericano de Desarrollo*, <https://publications.iadb.org/es/desigualdad-y-descontento-social-como-abordarlos-desde-la-politica-publica-informe-economico-sobre> (consultado el 9 de diciembre de 2024).

Martínez, André, Fadel Ugarte y Joaquín Zentner. "Desigualdad de género en la participación laboral y remuneraciones en el grupo de países CID, (Marzo de 2021)". *Banco Interamericano de Desarrollo*, <https://publications.iadb.org/es/desigualdad-de-genero-en-la-participacion-laboral-y-remuneraciones-en-el-grupo-de-paises-cid>. (consultado el 9 de diciembre de 2024).

Tilly, Charles. *Violencia Colectiva*. Barcelona: Hacer Editorial, 2003.

Segato, Rita Laura. *La Nación y sus otros*. Buenos Aires: Prometeo, 2007.